



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, cuatro de agosto de dos mil veintitrés

Se procede a resolver la solicitud de aclaración, adición y corrección formulada contra la sentencia proferida en el proceso ejecutivo promovido por MATRIARCA SAS contra COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC.

1. ANTECEDENTES

1.1 Dentro del término de ejecutoria de la sentencia proferida el 21 de julio de 2023 las partes solicitaron aclaración, adición y corrección de la sentencia; (i) la demandada pidió se aclare la parte introductoria de la sentencia porque se enunciaron datos de identificación que no corresponden al proceso, ello para evitar un motivo de duda; (ii) la demandante solicita se aclare y adicione la sentencia para que se precisen las razones de orden legal y jurisprudencial que le permitieron al Tribunal reabrir una etapa concluida en el presente trámite, referente a la discusión en torno a los requisitos formales del título ejecutivo, puesto que al margen de compartirse la decisión adoptada por el Juzgado de primera instancia, mediante auto del 14 de enero de 2022 se resolvió el recurso de reposición frente al mandamiento de pago, por tanto la discusión en torno al cumplimiento de los requisitos

formales del título ejecutivo se encuentra zanjada y tiene el efecto de cosa juzgada.

2. PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER

¿Es procedente la aclaración, la adición y la corrección de la sentencia?

3. CONSIDERACIONES

La *aclaración* es una figura que tiene como premisa que, una vez emitida la providencia judicial, no es reformable ni modificable por el Juez que la profirió.

La aclaración se encuentra contemplada en el artículo 285 del CGP:

“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenta conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.”

La *adición* de la sentencia se encuentra regulada en el artículo 287 del CGP al establecer:

“Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la Litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”

Y la *corrección* consagrada en el artículo 286 del CGP, está estatuida para los errores aritméticos, omisión, cambio o alteración de palabras.

3.1 Demandante

La parte demandante basa la aclaración y adición en la necesidad de sustentar el control de legalidad oficioso que ejerció el Tribunal como Juez de segunda instancia, a sabiendas que el Juzgado de conocimiento había resuelto todas las controversias en torno a los requisitos formales del título que presta mérito ejecutivo; situación que pone en evidencia que lo buscado por el demandante es volver a la discusión de fondo del litigio y ello torna improcedentes sus solicitudes.

Así debe observarse que la adición está pensada para aquellos eventos en los que se ha omitido resolver cualquiera de los extremos de la litis o punto que debía ser objeto de pronunciamiento expreso por parte del Juez, lo cual no se configura en el caso, porque se analizaron las pretensiones y las excepciones para concluir que el contrato de arrendamiento presentado como título que presta mérito ejecutivo adolecía de *claridad*, como aspecto sustancial y fundamente para adelantar un proceso ejecutivo, que parte de la claridad, expresividad y exigibilidad de los derechos que se pretenden ejecutar.

Sobre la aclaración, se limita a la existencia de conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda que estén contenidas en la parte resolutive de la providencia, lo cual no acontece, porque en la parte resolutive de la sentencia se precisó que se revocaba la sentencia apelada y en consecuencia se ordenaba cesar la ejecución, por falta de documentos que prestaran mérito ejecutivo.

De ahí que no se desprenda la existencia de ningún concepto o frase que ofrezca un verdadero motivo de duda que conlleve a la aclaración de la sentencia.

Se resalta que en la sentencia se consideró, **“El Juez como Director del Proceso con base en lo prescrito por los artículos 29, 228 y 229 de la CP en armonía con los artículos 1 y 2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y con los artículos 1, 2, 11, 13, 14, y 42 del CGP, entre otros, tratándose de proceso ejecutivo, debe ejercer control sustantivo y procesal de legalidad, sobre el documento que se allega como título ejecutivo, porque es la llave jurídica para ejercer el acceso ius fundamental a la administración de justicia a través de esta vía procesal.**

Como se trata de un documento o conjunto de documentos que deben contener derechos y correlativas obligaciones claras, expresas, actualmente exigibles, que provengan del deudor y constituyan plena prueba contra él o que por disposición expresa de la Ley tengan dicha categoría, es pertinente en las diferentes etapas del proceso, ejercer control de legalidad, para verificar si cesa o se continúa con la ejecución.

Por ello, estatuye el artículo 422 del CGP:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él...”

Así, para que un documento o conjunto de documentos puedan poner en movimiento el aparato jurisdiccional por medio de proceso ejecutivo, si no es la Ley quien expresamente lo cataloga como título ejecutivo, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Claro, cuando no queda duda del alcance y la profundidad de la obligación y del correlativo derecho consignados materialmente en el

documento, es inteligible, comprensible, cristalino y diáfano. Hay ausencia de este requisito, cuando para desentrañarlos se requiera de mecanismos axiológicos o de raciocinio que se traducirían en apreciación interpretativa y subjetiva, a lo que dice el documento en sí mismo.

El derecho y la correlativa obligación deberán ser expresos, es decir, estar especificados, determinados y manifestados en el documento o en el conjunto de documentos; de tal manera que de ellos se establezca quién debe, a quién debe, qué se debe, cuánto se debe, cuándo y dónde se paga.

Exigible, porque para hacer valer el derecho, el documento es (i) puro y simple; (ii) si está sometido a plazo, transcurrió o se aceleró, según el caso; (iii) si pende de condición, se cumplió; (iv) y si hay que constituir en mora, se cumplió con la carga.

Que provenga del deudor, es decir, no debe quedar duda que el documento o conjunto de documentos contienen la declaración de voluntad generadora de derechos y correlativas obligaciones en cabeza del deudor; y constituye plena prueba contra quién o quiénes se quiere hacer valer; como lo estatuyen los artículos 243 y ss. del CGP.

Dice el párrafo 4 del artículo 244 del CGP, “*Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.*”

Así, el documento fundamental a través del cual se pretende la ejecución es el contrato de arrendamiento de local comercial suscrito entre las partes el 4 de agosto de 2005 con efectos a partir del 1 de septiembre de

2005, puntualmente en lo concerniente con el valor y cobro de los cánones de arrendamiento – folios 5 a 14 del archivo 3 de la carpeta de primera instancia del expediente digital- pretendiendo el cobro ejecutivo del canon mensual de \$14.493.108, que no fue aumentado para el ciclo 2020 – 2021, teniendo presente que la demandada no pagó mayo, junio, julio y agosto de 2020; septiembre, octubre y diciembre de 2020 y lo corrido de 2021; al contemplar en la cláusula tercera..”

En conclusión, se NEGARÁ la aclaración y la adición de la sentencia.

3.2 Demandada

La demandada fundó su petición en la corrección de la parte introductoria de la providencia; por error se contemplaron partes que no correspondían con el proceso; por lo que al tenor de lo establecido en el artículo 286 del CGP y al evidenciarse un error en la enunciación de los nombres de las partes y la información respecto de la sentencia de primera instancia, se corregirá la parte introductoria de la sentencia, al *decidirse la apelación interpuesta por la parte demandada frente a la sentencia pronunciada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín el 10 de noviembre de 2022, en el proceso ejecutivo adelantado por MATRIARCA SAS contra COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC; no “el recurso de apelación presentada por la parte demandante frente a la sentencia proferida el 24 de octubre de 2022 por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, en el proceso ejecutivo adelantado por CONSTRUCCIONES GÓMEZ OROZCO SAS contra JUAN JOSÉ CONGOTE y ALTOS DE LA MARÍA AUXILIADORA SAS.”*

Asimismo, atendiendo a la fecha de celebración de las Sala de Discusión y Aprobación de la sentencia, se precisa que la fecha correcta de la sentencia es el 13 de julio de 2023 y no el 21 de julio de 2023; por cuanto el 13 de julio 2023 fue aprobada por los Magistrados integrantes de la Sala de Decisión Civil; el 21 de julio de 2023 corresponde con la fecha en que se remitió para notificación a la Secretaria; la notificación y enteramiento a las partes se surtió el 24 de julio de 2023 por parte de la Secretaría, momento a partir del cual contaron con la oportunidad para presentar las solicitudes de aclaración, adición y corrección de la sentencia.

DECISIÓN

La **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

PRIMERO: Por las razones expuestas, se **NIEGA** la aclaración y la adición de la sentencia.

SEGUNDO: Se **CORRIGE** la fecha de la sentencia y el acápite introductorio de la sentencia, así:

“Medellín, trece de julio de dos mil veintitrés.”

“Se procede a decidir el recurso de apelación interpuesta por la parte demandada frente a la sentencia pronunciada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín el 10 de noviembre de 2022, en

05001-31-03-002-2021-00314-01

Ejecutivo.

Demandante: Matriarca SAS

Demandado: Colombia Telecomunicaciones SA ESP BIC

Decisión: Niega aclaración y adición de la sentencia. Corrige error de digitación en la parte inicial.


**el proceso ejecutivo adelantado por MATRIARCA SAS contra
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC.”**

NOTIFÍQUESE POR ESTADOS ELECTRÓNICAMENTE.

Los Magistrados



RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA